

¿Cincuenta años de Europa?

Estos días, con total indiferencia ciudadana, los políticos profesionales y los poderes mediáticos están celebrando los cincuenta años –dicen- de la “Unión Europea”. Como esta denominación no surge sino hace quince años, en el Tratado de Maastricht, convendría recordar qué es lo que se inició en 1957, con los tratados de Roma. Fue una Comunidad Económica (CEE) y una Comunidad de la Energía Atómica (Euratom). Lo que se proyectó, pues, fue un gran mercado en el que los capitales financieros y las empresas pudieran operar cada vez en competencia más libre, para obtener el máximo beneficio. (Hoy, el caso Delphi, con el cierre de su factoría en Puerto Real, no es sino un buen aunque sangrante ejemplo del éxito del proyecto).

La Europa que se suele denominar política no empezó a construirse, prácticamente, hasta varias décadas después, en 1985, cuando la CEE dio paso a la Comunidad Europea poniendo en marcha un *Mercado Único* para capitales, mercancías, servicios y personas. Es a partir de aquí, y no mucho antes, cuando se comienzan a dar pasos efectivos en la senda política y –conviene no olvidarlo- en la militar. Pero, más allá de las consideraciones respecto a su génesis, la cuestión fundamental es qué representa hoy la Unión Europea: si, como tantos publicitan, un modelo para el mundo, o, como otros pensamos, uno de los mascarones de proa de la globalización capitalista ultraliberal que agranda las desigualdades y amplía las exclusiones sociales.

Para los defensores de la Europa realmente existente, los valores europeos serían una herencia de la Ilustración –cuando no de la tradición judeo-cristiana-- y constituyen lo que podría llamarse la cultura de los derechos humanos. Estos cimentarían un modelo social y garantista que contrastaría con el norteamericano y con aquellos no centrados en los derechos de las personas. Así, la UE sería actualmente un faro de libertades en un mundo de violencia fundamentalista y de negación de derechos.

Esta visión no resiste, sin embargo, la prueba de la realidad: ¿en qué país europeo está garantizado el ejercicio de los derechos que teóricamente se proclaman? ¿El trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la participación política efectiva, la igualdad de género, la opción sexual, un medio ambiente de calidad, el autogobierno de los pueblos y tantos otros bienes, definidos sobre el papel como derechos, están garantizados para todos? Y no me refiero sólo a la situación de los inmigrantes, a quienes se les niegan jurídicamente por no poseer el estatus de ciudadanos, sino también a las mayorías sociales. Cuando los gobiernos europeos colaboran con la CIA, o miran para otro lado, en los secuestros de personas sospechosas de terrorismo y en los traslados a siniestros limbos de derechos como Guantánamo, ¿se puede mantener la ficción de que somos una isla de libertad?

En realidad, tanto el discurso de los derechos humanos (individuales pero no colectivos), como el de la democracia (entendida restrictivamente como democracia representativa liberal), no son sino coartadas para hacer aceptar lo que se plantea como su condición indispensable e inseparable, cuando es realmente la causa de su imposible ejercicio: el “libre mercado”. Cuyos valores centrales –y, por tanto, los verdaderos valores europeos- son la competitividad insolidaria, la mayor productividad y beneficios sin importar los costes humanos y ecológicos, y la construcción no sólo de una economía de mercado sino de una sociedad y una cultura también de mercado.

Dada la primacía absoluta de estos valores, la única Europa política que se está construyendo es aquella en que los políticos, asumiendo el papel de meros gestores del Mercado “libre”, eliminan los obstáculos legales a la libertad del dinero, destruyendo las defensas y regulaciones existentes y acordando directivas dirigidas a impulsar la competitividad y la productividad del capital. La independencia del Banco Central, las carencias del Parlamento Europeo, que sigue siendo poco más que un parlamento de papel, o la ausencia de los pueblos sin estado, que apenas tienen otro lugar que un Comité de las Regiones meramente anecdótico, no son sino signos de la subalternidad de la política respecto a instancias e intereses económicos no sujetos a control democrático. La paralización de la mal llamada Constitución que elaboraron por su cuenta los políticos, indica la profunda crisis de confianza en la Europa que nos están construyendo.

Más que para discursos retóricos, este aniversario debería haber servido para debatir sobre otras Europas posibles en las que se garantice el ejercicio de los derechos, individuales y colectivos, y no el beneficio salvaje de quienes obscenamente presumen de aumentar, de un año al siguiente, sus beneficios en más de un 50%.

ISIDORO MORENO
Catedrático de Antropología
Universidad de Sevilla